

La comunidad educativa se moviliza por una reforma de calidad

Virgili Burrel i Ferrer

Con el lema "La reforma educativa ha de ser una inversión de futuro para Catalunya", las organizaciones representativas de la comunidad educativa catalana (federación de asociaciones de padres de alumnos, movimientos de renovación pedagógica, asociaciones de estudiantes y sindicatos docentes), han iniciado una campaña de sensibilización social que pretende movilizar a la ciudadanía en torno a los principales problemas que hoy presenta la educación catalana. La campaña culminará el domingo 16 de febrero con una manifestación central en Barcelona.

Se renueva así la dilatada tradición de colaboración entre los sectores de la comunidad educativa en un difícil momento para la reforma catalana: con la renuncia a una Ley Educativa propia, desde el inicio del presente curso el Departamento de Enseñanza de la Generalitat ha optado por un despliegue parcial de la LOGSE fundamentado en decretos unilaterales orientados a la privatización del servicio escolar y vacíos de medidas de calidad educativa. Por otro lado, la parálisis política del Departamento -con el anunciado relevo del conseller Laporte después de las elecciones catalanas-, ha desembocado en un bloqueo total de las negociaciones con los docentes después de varios días de huelga en los sectores privado y público. Por si fuera poco, los últimos años han servido para constatar los reiterados incumplimientos por parte de la Generalitat de los compromisos adquiridos con la comunidad educativa en materia de calidad de enseñanza: la generalización del aula de tres años, la incorporación de maestros especialista, la dotación de personal administrativo en los centros de EGB, los planes de formación del profesorado..., son algunos ejemplos de lo que Laporte deja pendiente para quien le sustituya el próximo mes de marzo.

Nadie a estas alturas cree ya que en Catalunya sea posible llevar a cabo una reforma en condiciones de calidad si no se produce una inflexión en la actual política educativa; las arbitrariedades del Departamento de Enseñanza desvirtúan todos y cada uno de los objetivos y mecanismos de actuación previstos para la reforma. El documento de base de la campaña pone de manifiesto cuatro aspectos de suma importancia sobre los que se pide una rápida rectificación.

En primer lugar, el Mapa Escolar de las diversas comarcas y localidades catalanas se está elaborando al margen de la comunidad educativa, presentando a los ayuntamientos proyectos ya decididos de antemano para la red pública y dejando fuera del control social la aplicación de la reforma en los centros privados, el 60% de los cuales no cumple el decreto de requisitos mínimos de calidad. Además, los mapas escolares del Departamento de Enseñanza sustraen a los consejos escolares de centro y municipales cualquier información sobre plantillas, adecuación de centros, especialidades de FP, tipos de bachillerato, etapa 0-3 años, formación de personas adultas, centros de educación especial, presupuestos previstos para la inversión en el parque escolar... En estas condiciones, la extensión de la escolarización no obligatoria y la mejora del servicio educativo pueden quedar para mejor ocasión, y no digamos la determinación de una oferta de plazas públicas de calidad en todos los tramos, cuando los decretos del Departamento

de Enseñanza van dirigidos a acelerar el ritmo y las cuantías de las subvenciones en la educación infantil y secundaria privadas.

La ampliación de las plantillas docentes y de administración de los centros públicos es otro de los motivos de preocupación de la comunidad educativa: el Departamento de Enseñanza se obstina en rechazar las demandas sindicales de ampliación y consolidación de plantillas, niega la estabilidad al colectivo de profesorado interino..., y se limita a avanzar vaguedades en los medios de comunicación que después quedan en el olvido. Mientras tanto, cierra aulas en los centros de EGB, retrasa la reducción de ratios, suprime por decreto los equipos de apoyo y orientación previstos en la LOGSE para los centros de secundaria..., CC.OO. ha calculado que hacen falta en la enseñanza pública catalana unas 10.000 nuevas plazas docentes para cubrir adecuadamente la extensión de la escolarización que prevé la reforma, pero todo indica que las autoridades catalanas no están por la labor.

La formación permanente del profesorado siempre ha sido considerada como uno de los elementos capitales de la reforma. Los cursillos de formación básica para la reforma organizados por el Departamento de Enseñanza, iniciados en enero, son un ejemplo de cómo no deben hacerse las cosas: sin proporcionar a los centros sustitutos para cubrir el servicio educativo mientras se realizan, sin consultar al profesorado, restringidos en la oferta y nombrando a dedo a los formadores, desvinculados de la práctica pedagógica cotidiana, concentrados en localidades y dificultando el acceso al profesorado rural..., la indignación de los docentes por todo esto se ha traducido en numerosas protestas y la no asistencia a los cursos en muchas zonas de Catalunya. Es urgente la negociación de un plan de formación alternativo si se quiere abordar con seriedad el cambio.

Por último, el documento de la comunidad educativa subraya el derecho del profesorado a la homologación retributiva con los funcionarios no docentes de la Generalitat, contemplada ya en los acuerdos de 1989 que el Departamento se niega a cumplir. Resulta incomprensible que al iniciarse la reforma el gobierno catalán sea prácticamente el único del Estado español que no ha solucionado todavía este asunto: ¿qué esfuerzo puede pedirse al profesorado si se le niega la equidad?

La defensa de todas estas reivindicaciones constituye el núcleo de la campaña iniciada; el objetivo es conseguir una reforma de calidad mediante la colaboración y el consenso de todos los sectores de la comunidad educativa, cerrando el paso a las actuaciones unilaterales y las imposiciones de la Administración. Participar en ella ahora es trabajar por el futuro de la educación catalana.